

**CONTESTA TRASLADO. SE RECHACE EXCEPCION. PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD.**

Excma. Cámara Contencioso Administrativo SALA II

**Juicio: "FERNANDEZ BRUNO GUSTAVO C/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN S/ Amparo". Expte: 658/13**

**GUILLERMO TREJO**, por derecho propio, con domicilio constituido en casillero digital N° 20-22414893-4 a V.E., respetuosamente digo:

**I.- OBJETO: CONTESTA TRASLADO. PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD:**

Que vengo en legal tiempo y forma, a contestar traslado dispuesto por providencia del 19/02/2021, que fuere notificado a este letrado en fecha 14/05/2021, ello conforme cédula depositada en casillero digital en fecha 12/05/2021, solicitando se rechace la excepción deducida por la parte ejecutada, como así también solicito se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 8851, su Decreto Reglamentario 1583/1, y de toda norma relacionado y/o vinculada que impida al presente letrado hacerse de los honorarios profesionales regulados en autos, en virtud a las consideraciones de hecho y derecho que a continuación se exponen, todo con expresa imposición de costas a la ejecutada.

**II.- FUNDAMENTOS:**

Las sumas que en autos se ejecutan provienen de sentencia de fecha 31 de Agosto del 2016 dictada por esta Excma. Contencioso Administrativo SALA II,

mediante la que se regularon honorarios los profesionales por mi actuación en los autos de marras. Dicha sentencia regulatoria se encuentra firme, pasada en autoridad de cosa juzgada formal y material. Conforme lo establece el art. 541 del Código Civil y Comercial de la Nación, dicho crédito tiene carácter alimentario ya que responde específicamente al fruto civil de la profesión, constituyendo el medio para satisfacer las necesidades vitales propias y de mi familia.

Hoy por hoy, los honorarios profesionales son un ingreso vital que asegura la subsistencia del dicente y la de su familia. De mas esta decir que posibilitan el desenvolvimiento humano, económico, intelectual y profesional (reviste las características enunciadas por el Art. 1° de la Ley N° 5.480) criterio que fue valorado de esa manera por numerosos fallos de Nuestra Corte (CSJT, sent° 386 del 04/05/2009, n° 361 del 21/5/2012, n° 1155 del 19/12/2012, y muchas mas).

La imposición maquinal e indiferenciada de la regla del mecanismo presupuestario, y la rigidez del sistema instituido por la Ley 8.851, ha dejado de significar aquí una espera razonable, para trocarse en una lesiva alteración del derecho reconocido como una propiedad alimentaria suya por una sentencia firme en este proceso judicial (art. 17 Const. Nac.). Por lo que, no puede considerarse el régimen de inembargabilidad como un privilegio eterno y absoluto desprovisto de límites razonables, en cuanto a su vigencia o duración, proporcionado en el tiempo y en cuanto a su contenido intrínseco de alcance omnicomprensivo, hermético e indiferente desconectado de las variadas circunstancias reales de necesidad usual o debilidad extrema respecto a cada acreedor. “La ley de presupuesto debe ser una técnica para la realización de los derechos, no debe ser un medio para menoscabarlos” (Corti, Horacio, "Derecho Constitucional Presupuestario", Ed. LexisNexis, Bs. As. 2007, p. 694).

La Ley n° 8851 resulta aquí claramente violatorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, que asegura una racional igualdad de trato para los "iguales en igualdad de circunstancias, toda vez que "aplicar mecánicamente un mismo trato a situaciones distintas sería tan injusto como aplicar un trato distinto a situaciones

iguales (Corte Internacional de Justicia, sentencia del 18/07/1966, "Recueil" 1966, p. 305; citada en: Gialdino Rolando E. "Derecho Internacional de los Derechos Humanos: principios, fuentes, interpretación y obligaciones", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013, p. 138).

La C.S.J.N. ha sido también muy clara al advertir que "se vulneraría el principio de igualdad si se contemplare en forma idéntica casos que entre sí son diferentes (Fallos: 16:118; 123:106; 124:122; 127:18; 150:89; 153:67, 111, 130; 154:283; 300:984; 312:826, entre muchos otros), "por cuanto la garantía de igualdad ante la ley precisamente radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias" (Fallos: 7:118; 95:327; 117:22; 126:280; 127:167; 132:198; 137:105; 138:313; 143:379; 149: 417; 151:359; 182:355; 199:268; 270:374; 286:97; 300:1084; 306:1560, entre muchos otros).

Resulta aquí suficientemente nítida y determinante la naturaleza alimentaria y la moderada cuantía del crédito de honorarios que se ejecutan que se imponen a la cerrazón absolutamente indiferenciada de la Ley n° 8851, y clama por una satisfacción inmediata de la condena sin más demoras.

Es oportuno señalar que cuando la ley n° 8851 adolece de invalidez constitucional no es posible sostener que incida en modo alguno- sobre la vigencia del efecto ejecutorio previsto en el art. 80 del CPA.

Es legítimo presumir dotación presupuestaria suficiente, o dicho de otro modo, no resulta objetivamente verificable que en las constancias de este proceso los fondos que eventualmente se vayan a embargar "resulten indispensables para el desarrollo normal del presupuesto del Estado Provincial (CSJN, Fallos 311:1795 y 318:2660).

Cito Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán en los autos "Álvarez Jorge Benito y otros s/Prescripción adquisitiva" (Sent. n° 1680/2017). En este sentido, nuestro Címero Tribunal indicó que "ante la omisión de

previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley N° 8.851 ("Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva), del art. 2 del Decreto N° 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del art. 2 de la precitada Ley N° 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público).-

En consecuencia, solicito se ordene llevar adelante la presente ejecución hasta las sumas reguladas como honorarios profesionales por las labores realizadas en autos.

### **III.- PETITORIO:**

En virtud a la expuesto a V. E. respetuosamente pido:

1) Se tenga por presentado este escrito y por formulada la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 8851, su reglamentación y de toda otra norma que impidiera a este letrado el cobro de sus honorarios profesionales.

2) Se haga lugar al planteo de Inconstitucionalidad.

3) Se ordene llevar adelante la presente ejecución de honorarios, con expresa imposición de costas a la accionada.

Provea de conformidad y se hará,

**JVSTICIA.-**

Firmado Digitalmente por:

Guillermo Trejo - Abogado  
Mat. Tuc. 3943 - L° 1 F° 927  
Mat. Concep. 1555 - L° 1 F° 43  
Mat. Fed. T° 96 - F° 914  
CUIT N°: 20-22414893-4